

1º.- DESESTIMAR el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Márquez Martínez en nombre y representación de D.ª Adoración Martínez Guardia contra la Orden de la Consejería de O.P. y P.T. nº 1858, de 17-7-2001, ya que la falta de notificación de un acto no determina su nulidad sino su ineficacia, no habiéndose producido indefensión pues la interesada ha tenido conocimiento del acto no notificado y se ha opuesto al mismo mediante recurso administrativo, siendo contrario al principio de "economía procesal" retrotraer las actuaciones al momento del defecto alegado, pues el nuevo acto que se produciría sería igual al anulado.

2º.- DESESTIMAR la suspensión del acto administrativo impugnado, por el que se ordenan la adopción de medidas preventivas de seguridad en el inmueble sito en C/. Pradilla nº 1, consistentes en:

- Saneado y/o consolidación de las partes deterioradas y con riesgo de desprendimientos, (especialmente en patios fachadas y entrevigados), así como el apuntalamiento preventivo de las zonas de forjado en peor estado, como son las correspondientes al estudio y a la vivienda 3 (1º izqda.), con el menor perjuicio posible a sus ocupantes.

Estas medidas de seguridad se adoptarán con carácter urgente e intervención de Técnico competente, quien podrá disponer otras que, a su juicio y tras reconocimiento más detallado, considerase oportunas, debiendo presentar certificado, visado por el Colegio correspondiente, en el que conste la realización de las mismas, que se entenderán como cautelares, hasta tanto se resuelva definitivamente el expediente y se ordene lo que proceda según la legislación.

3º.- CONCEDER un nuevo plazo de diez días a D.ª Adoración Martínez Guardia para que concrete día y hora en que facilitará la entrada a los operarios que por la propiedad se designen a fin de ejecutar las medidas preventivas de seguridad, significándole que transcurrido dicho plazo por la Ciudad Autónoma se solicitará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Melilla, autorización de entrada a la vivienda del inmueble sito en C/. Pradilla nº 1 para que por la propiedad del mismo o por la Consejería de O.P. y P.T., por ejecución subsidiaria, se proceda al apuntalamiento preventivo de las zonas con riesgo según informe de los Servicios Técnicos de esta Consejería".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 10.1ª) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 14 de Septiembre de 2001.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA JEFATURA DE TRÁFICO

2446.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de Un Mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP.= Meses de suspensión.

Melilla, 7 de Septiembre de 2001.

El Delegado del Gobierno.

Arturo Esteban Albert.